
*A. Pizzuti**

*La gestión de la Política
Agrícola Común
y la organización
político-administrativa
de los Estados miembros
de la Comunidad Económica
Europea***

I. LA POLITICA AGRICOLA COMUN

1. Es útil, con objeto de poder analizar mejor los problemas que crea la gestión de la Política Agrícola Común (P.A.C.), recordar brevemente que la P.A.C. es el resultado del desarrollo, en el plano comunitario, de dos políticas diferenciadas en este terreno: la política de precios y mercados y la política de estructuras agrarias.

La aplicación de la primera ha dado origen a las diferentes organizaciones comunes de mercado que cubren hoy casi todas las producciones agrícolas, mientras que para aplicar la segunda han sido decididas y adoptadas una serie de acciones y medidas que tienden a mejorar, de un lado, las condiciones socio-económicas en agricultura y, de otro, la combinación de factores de producción a nivel de la explotación agraria.

* Director General Adjunto de Agricultura. Comisión de las Comunidades Europeas.

** Traducción de José Manuel Rodríguez Molina.

— Agr. y Soc. n.º 29 (octubre-diciembre 1983).

2. Delimitar entre estas componentes de la P.A.C., que conjuntamente persiguen asegurar, por medios e instrumentos diferentes, una renta justa para los agricultores, se hace necesario no solamente desde el punto de vista histórico o técnico-económico, sino también por las diferencias esenciales existentes tanto en la naturaleza como en el alcance de las decisiones comunitarias adoptadas para la puesta en marcha de las dos políticas.

A estas diferencias, por otra parte, corresponden obligaciones de carácter distinto para los Estados Miembros y para sus súbditos, en el momento de ejecutar o de respetar las decisiones adoptadas por la Comunidad en materia de política de precios y mercados por una parte, y de política de estructuras agrarias por otra.

En particular, y debido a estas diferencias la estructura política administrativa de cada Estado Miembro ha desempeñado, o hubiera podido desempeñar, un papel muy importante en la gestión de la P.A.C.

A este respecto, sin embargo, y de una manera general, conviene señalar que, para la elaboración y aplicación de una política común como la P.A.C., las disposiciones del Tratado de Roma (artículos 38 al 45) confieren a la Comunidad, como tal Comunidad, una amplia competencia legislativa y un poder de decisión muy extenso ejercido por el Consejo de Ministros de las Comunidades Europeas y por la Comisión.

Así, habida cuenta del grado de desarrollo, en el plano europeo, de la P.A.C., el poder legislativo autónomo de los Estados Miembros en el campo agrícola es en realidad, en el momento actual, relativamente limitado y reservado a los aspectos de esta política no reglamentados por el derecho comunitario.

En consecuencia, y en la medida en que en los Países Miembros con estructura federal o regional este poder se ejercía, o hubiera podido continuar ejerciéndose, por un poder central a escala nacional, juntamente con entidades locales (estados, Länder y regiones) o directamente por entes locales de acuerdo con las normas constitucionales, con la entrada en vigor de la política comunitaria, incluso estas entidades periféricas han visto reducido su poder.

Esta limitación de los poderes locales (regiones), acompañada por la institución de un centro legislativo «exterior» o «supranacional» (la Comunidad), en cuyas decisiones participan únicamente los poderes centrales (gobiernos nacionales), ha hecho que se planteen problemas entre los tres entes en cuestión, tanto en el plano constitucional como en el jurídico y administrativo.

4. Los problemas han sido más agudos y más difíciles de resolver, evidentemente, cuando se han planteado sobre aspectos de la P.A.C., en los que los poderes de los entes locales eran histórica o constitucionalmente más consistentes.

Además, la forma jurídica adoptada para la promulgación de las Leyes comunitarias (reglamento, directiva o decisión) ha contribuido a determinar tanto el alcance de las diferencias surgidas como el tipo de soluciones impuestas.

En base a lo que antecede se puede afirmar sin ninguna duda que la estructura político administrativa de los Estados Miembros ha tenido más impacto sobre la gestión de la política de estructuras agrarias que sobre la política de precios y mercados.

5. Es necesario, sin embargo, resaltar que la obligación de asegurar una correcta y eficaz aplicación de la P.A.C. en su conjunto, ha llevado de una manera autónoma o impuesta (Sentencias del Tribunal de Justicia) a algunos Estados Miembros a adaptar sus estructuras administrativas a las exigencias que se derivan de los intereses comunitarios, y todo ello en beneficio de los destinatarios de la P.A.C.

Estas adaptaciones han ido, en la mayor parte de los casos, en el sentido de una mayor concentración de las responsabilidades por parte del poder central y consecuentemente se han traducido en una disminución o limitación ulterior de la autonomía legislativa de los poderes periféricos.

En los capítulos siguientes se analizará con más detalle el conjunto de esta problemática.

II. NATURALEZA Y ALCANCE DE LAS MEDIDAS DE POLÍTICA DE PRECIOS Y MERCADOS

1. La política de precios y mercados realizada a través de las reglas y disposiciones que regulan cada «organización común de mercados», tiende a asegurar a todos los agricultores de la Comunidad un precio predeterminado para los productos incluidos en las reglas comunitarias.

Este precio se determina cada año por el Consejo de Ministros de la Comunidad, a propuesta de la Comisión. Su nivel se fija con el criterio de asegurar a los productores la obtención de una renta justa; es único, es decir, válido para todo el territorio de la Comunidad para el producto determinado, y se garantiza por un conjunto de medidas obligatorias, referidas tanto al mercado interior como al comercio exterior, que son decididas por la Comunidad y que los Estados Miembros tienen obligación de aplicar.

Todas las disposiciones adoptadas por la Comunidad en el marco de esta política responden por lo tanto a dos características fundamentales.

— «Uniformidad», es decir, las aplicaciones se aplican y respetan de igual manera en todos los Estados Miembros, sin discriminación alguna entre los ciudadanos de la Comunidad, tanto en lo que se refiere al régimen aplicable al mercado interior (reglas para la comercialización, normas de calidad, medidas de intervención, retirada del mercado, almacenamiento público, desnaturalización de productos, primas a la transformación, etc.), como en lo aplicable en la frontera comunitaria (certificados de importación, percepción de derechos de aduana, *prélèvement* y otras tasas, régimen de exportación, concesión de restituciones).

— «Obligatoriedad», es decir, las disposiciones vinculadas a los Estados Miembros, que tienen la obligación de asegurar su aplicación y ejecución dentro del respeto del derecho comunitario.

2. El carácter específico de las decisiones y las medidas relativas a la política de precios y mercado ha tenido consecuencias importantes a nivel comunitario, tanto en el plano jurídico como en el financiero.

En el plano jurídico, y teniendo en cuenta los instrumentos previstos a este respecto por el Tratado, la casi totalidad de las normas que regulan esta política, han sido adoptadas por vía de «Reglamento», instrumento jurídico comunitario directa y uniformemente aplicable en cada Estado Miembro y obligatorio en todos y cada uno de sus artículos.

Se trata de un instrumento jurídico que debe ser aplicado a partir del momento de su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad y cuyo respeto es exigible a las Administraciones nacionales y a los súbditos de los Estados Miembros.

Por otra parte, en la formación e interpretación del derecho comunitario, el Tribunal Supremo de Justicia no se ha separado nunca en sus Sentencias de estos principios fundamentales.

En el plano financiero, y teniendo en cuenta la forma en que la puesta en marcha de la política de precios y mercados fue concebida, se hacía necesario como elemento esencial para alcanzar los objetivos del Tratado; que la Comunidad hiciese frente a la totalidad de los gastos que se derivan de esta política, creando para ello el Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícolas (F.E.O.G.A.).

Este Fondo, alimentado por «recursos propios» de la Comunidad (percepción de derechos de aduana, *prélèvements* y una parte del I.V.A.), forma parte del presupuesto comunitario y facilita a las Administraciones nacionales los medios financieros para hacer frente a la totalidad de los gastos generados por la aplicación de las medidas de organización de mercados.

Se debe señalar, además, que una aplicación de las decisiones en desacuerdo con las reglas fijadas por la Comunidad llevaría consigo, entre otras cosas, el no reembolso por el Fondo Comunitario de esos gastos y representaría por lo tanto una penalización para el Estado Miembro.

III. LA GESTION DE LA POLITICA DE PRECIOS Y MERCADOS Y LA ORGANIZACION POLITICO-ADMINISTRATIVA DE LOS ESTADOS MIEMBROS

1. A la luz de todo lo anterior, es fácil deducir, que los Estados Miembros, aunque participan de pleno derecho, como Miembros de la C.E.E., en la formulación de las decisiones adoptadas por la Comunidad, no tienen, en tanto que tales Estados y en materia legislativa, un papel activo decisivo a nivel nacional.

En efecto, los Estados Miembros, en materia de precios y mercados agrarios, deben limitarse a ejecutar las Leyes comunitarias y a vigilar que en el plano nacional sus estructuras políticas y administrativas aseguren, en beneficio de los productores y salvaguardando el pleno derecho comunitario, una aplicación y una gestión eficaz, exacta, uniforme y, por tanto, no discriminatoria, de los Reglamentos Comunitarios.

Hemos dicho anteriormente que esta transferencia por los Países Miembros, de su poder de decisión hacia instancias comunitarias, en política común de precios y mercados, no ha dado lugar a tensiones dramáticas entre el poder central de los Estados Miembros y los poderes periféricos nacionales en lo que se refiere a disminución o limitación del poder legislativo ni en lo referente a la ejecución y a la gestión de esta política.

En realidad, incluso en los Estados Miembros con estructura federal muy arraigada, el poder ejecutivo y legislativo de los Entes periféricos estaba, sin duda ya antes de la formación de la Comunidad, extremadamente limitado en el campo de la política agrícola nacional de precios y mercados.

La naturaleza de esta política, que tiende a crear en el interior del mercado «nacional» unas condiciones de base uniformes (concepto de precio único nacional, medidas de aplicación general para las intervenciones, régimen exterior de exportación y de importación válido para el conjunto del territorio nacional, financiación de la parte del presupuesto «federal», había condicionado a los Estados Miembros interesados a optar en el marco de sus estructuras políticas y admi-

nistrativas por una toma de decisión y una gestión tan centralizada como fuera posible.

Por esta razón, la elaboración a nivel comunitario y la ejecución centralizada a nivel nacional de la política común de precios y mercados, con una sola excepción, no ha sido objeto de reivindicaciones particulares por parte de los Entes periféricos de los Estados Miembros.

2. En Alemania y en el Reino Unido, por ejemplo, donde las leyes existentes ya, en el momento de la entrada en vigor de la P.A.C., en el marco de la política nacional, regulaban las competencias entre poderes centrales y «periféricos» en el sentido limitado indicado anteriormente, se puede decir que su organización político administrativa, tal como estaba constituida en el momento de la entrada en vigor de la política común, no ha afectado a la gestión de la P.A.C. en lo que se refiere a precios y mercados.

Es verdad igualmente que la naturaleza de las obligaciones que se derivaban del derecho comunitario en la materia, no han conducido a estos Estados Miembros a aportar modificaciones sustanciales en sus estructuras políticas y administrativas, salvo en el caso excepcional, entre otros, de los *Status* jurídicos de ciertos organismos de regulación de mercados (Boards) (1).

En este sentido se puede precisar, citando el caso de la República Federal de Alemania, que:

— El Bund (La Federación), a través de sus representantes (ministros federales en el Consejo de Ministros de la C.E.E. y funcionarios nacionales en el Comité de Gestión), participan en la toma de decisiones a nivel comunitario.

— La Administración «Central» asegura, a través de los organismos gubernamentales federales y de sus servicios periféricos (Ministerio Federal de Agricultura, Administración Federal de Aduanas, Einfuhr und Vorrantstellen, etc.), la puesta en marcha y la gestión de la política común en este terreno.

— Los *länder* no tienen poderes específicos, aunque les cabe la posibilidad de ejercer una acción política en el mo-

mento en que, en el plano interior alemán, el Ministro Federal debe definir su posición en el seno del Consejo de Ministros de la Comunidad con respecto a propuestas de la Comisión de la C.E.E.

— La financiación se define y asegura por un medio comunitario (F.E.O.G.A., sección garantía).

3. En lo que se refiere a Italia, país miembro en el que la puesta en marcha de la organización política regional se ha producido para las regiones con estatuto «ordinario» después de la puesta en vigor del Tratado y la adopción de las primeras medidas de la P.A.C., se puede afirmar que la naturaleza y el alcance de la política común de precios y mercados ha sido uno de los elementos básicos para delimitar definitivamente el reparto de competencias entre el Estado y las regiones, decisión que ha llevado a una importante limitación, incluso exclusión, de todo poder periférico en la materia.

La Constitución italiana prevé una estructura regional y establece la distinción entre las regiones con régimen especial (Statuto Speciale): Sicilia, Cerdeña, Trentino-Alto Adigio (Provincia autónoma de Trento y Bolzano) y valle de Aosta, con un régimen autónomo muy amplio, y las otras regiones con régimen ordinario (Statuto Ordinario).

En materia agrícola, la Constitución prevé que las Regiones con régimen especial pueden ejercer un poder legislativo «exclusivo» dentro del respeto de las normas fundamentales de las reformas socio-económicas de la República.

En realidad, estas regiones con régimen especial no habían ejercido aún este poder en el momento de la creación de las regiones con régimen ordinario. Por ello, y hasta esa fecha, no habían surgido problemas de competencias entre los poderes de las regiones con régimen especial y el poder central.

El conflicto estalló, por iniciativa de las regiones con estatuto ordinario, debido a la promulgación de un Decreto del Presidente de la República de 15-1-72, número 11, publicado en el «Boletín Oficial» número 46, del 19-2-72.

Este Decreto, que se refiere a la puesta en marcha y definición de las regiones con régimen ordinario, precisaba que «la aplicación de los reglamentos, directivas y otros actos jurídicos de la Comunidad concernientes a la política de precios y mercados, el comercio de productos agrícolas y la intervención en las estructuras agrarias», eran competencia del Estado.

Tres regiones (Emilia Romana, Lombardía y Umbría) estimaban que no podían aceptar la decisión del Presidente de la República, puesto que, con base a la Constitución el Estado hubiera podido ser competente, pero únicamente en la fase final del proceso de decisiones en el plano comunitario, y que correspondía a las regiones «la competencia para preparar estas decisiones y sobre todo la aplicación de los reglamentos, de las directivas y de todos los demás actos de la Comunidad».

El Tribunal Supremo italiano rechazó el recurso por la decisión número 142, de 24-7-72.

El Tribunal precisó ante todo que las regiones no son competentes para intervenir en materia de precios y mercados, así como en el comercio de productos agrarios, puesto que las intervenciones en estos sectores tienen como objetivo la tutela de intereses que se insertan por definición en una esfera ultrarregional.

En lo que se refiere a la competencia regional en política de estructuras agrarias, la Sentencia del Tribunal ha sido negativa en cuanto al fondo, pero de naturaleza condicional.

En el capítulo siguiente volveremos sobre este tema.

El caso italiano puede ser por lo tanto considerado como ejemplo de una adaptación limitada de la autonomía reclamada por las regiones; adaptación para la cual la naturaleza y el alcance de la política de precios y mercados ha representado un papel significativo en el reparto de poderes, si no en el plano jurídico, con toda seguridad en el plano político.

En efecto, el proceso de decisión y puesta en aplicación de la política de precios y mercados a nivel del Gobierno central, no ha sufrido ninguna modificación: después de la en-

trada en vigor de la estructura regional del país, las regiones fueron declaradas incompetentes para ocuparse de este tema.

El ministro de Agricultura y otros ministros intervienen en el Consejo de Ministros de la Comunidad; la Administración central italiana (Ministerio de Agricultura y otros Ministerios competentes, la Administración de Aduanas y el Organismo de Intervención —A.I.M.A.—) y sus Servicios periféricos son los únicos responsables para asegurar a nivel nacional la buena gestión de los Reglamentos comunitarios.

4. Se puede, por tanto, constatar que, en su conjunto, los Estados Miembros han mantenido, o bien, reforzado, o adaptado, de facto, su organización político-administrativa para participar en las decisiones a nivel comunitario y en la gestión a nivel nacional de la política común de precios y mercados.

Sin embargo, podemos preguntarnos, admitiendo *a priori* la necesidad de una responsabilidad central, por lo tanto nacional, en materia de participación en las decisiones comunitarias, si no se podría imaginar una mayor descentralización en materia de ejecución y de gestión de esta misma política y si esa descentralización más amplia no garantizaría una gestión más eficaz.

Hemos indicado ya anteriormente los elementos más importantes que, desde el punto de vista histórico, político y económico, constituyen el origen de esta «centralización».

Además, la experiencia adquirida en el plano práctico por los Estados Miembros ha reforzado la tesis y las opiniones en favor de la gestión centralizada.

Es un hecho cierto que, además de la uniformidad en la aplicación de las medidas decididas, la centralización de la gestión permite, mejor que un proceso de actuación descentralizado, asegurar la realización de dos factores importantes para la eficacia de la acción, es decir: de una parte, la rapidez de puesta en marcha en el plano nacional de las medidas adoptadas a nivel comunitario (Consejo de Ministros, Comités de Gestión y/o Comisión), y, de otra, la sincronización necesaria para la ejecución de la medida en todo el territorio nacional.

Por otra parte, conviene señalar que, si hubiera carencia del poder regional en el caso de gestión descentralizada, el Estado Miembro sería considerado jurídicamente responsable de las consecuencias negativas tanto de cara a sus súbditos como de cara a la Comunidad.

Teniendo en cuenta también todos estos elementos, para hacer frente a la obligación de garantizar una buena gestión, la mayoría de los Estados Miembros han llevado a cabo un reforzamiento de la Administración Central.

Los efectivos de los Ministerios y de las Administraciones Aduaneras se han reforzado con la creación de servicios y de personas especializadas en los asuntos comunitarios.

Allí donde no existía, se ha constituido un organismo central responsable de las intervenciones en el mercado. En otros casos los Servicios nacionales de intervención se han reestructurado y en ciertos casos, unificado.

A menudo sus funciones se han completado confiándoles el papel de organismos «habilitados» para los pagos a los productores y operadores comerciales previstos por la organización común de mercado y para las relaciones con la Administración del F.E.O.G.A.

Esta centralización no ha excluido, por otra parte, el reforzamiento o la creación de cierto número de servicios auxiliares encargados de ejecutar en el territorio nacional las operaciones técnicas específicas (Oficinas de Intervención, por ejemplo).

IV. NATURALEZA Y ALCANCE DE LAS MEDIDAS DE POLÍTICA DE ESTRUCTURAS

1. La naturaleza y el alcance de las medidas tomadas para la elaboración y la puesta en marcha de la Política Común en lo que a mejora de las estructuras agrarias se refiere, son muy diferentes de las indicadas anteriormente a propósito de la política de precios y mercados.

En el caso de la política de estructuras, se trata de prever la aplicación de medidas, tanto en el plano técnico como en el económico y social, teniendo como objetivo «aumentar la

productividad de la agricultura desarrollando el progreso técnico, asegurar el desarrollo racional de la producción agraria, así como el empleo óptimo de los factores de producción, en particular de la mano de obra».

En este sentido es necesario señalar, ante todo, que si para la política de precios y mercados las normas tienen por sujeto «pasivo» y «neutros» los productos agrarios (precio para un producto definido, reglas de intervención y comercialización, etc.), las medidas de política de estructuras tienen uno extremadamente complejo, ya que se trata de la explotación agraria y su entorno y van dirigidas en primer lugar al agricultor, cuyas cualidades humanas, experiencia y preparación profesionales condicionan la naturaleza, el alcance y, finalmente, el éxito de las medidas tomadas.

Si se tiene en cuenta la diversidad de situaciones que se presentan dentro de la agricultura comunitaria, se comprende fácilmente la razón por la cual la política de estructuras conlleva medidas no uniformemente aplicables en toda la Comunidad y que en ocasiones se aplican solamente a una parte del territorio comunitario.

Además, por las mismas razones, su carácter «obligatorio» no es siempre evidente, y las excepciones, en lo que se refiere a este punto, son numerosas en el sentido de que los Estados Miembros pueden por sí mismos decidir si deben o no aplicar una determinada medida.

En definitiva, en base a una concepción comunitaria de conjunto que prevé la realización de los objetivos antes indicados, las medidas que deben conducir, a través de inversiones financieras, a la mejora de las estructuras técnicas y económicas comunitarias deben ser concebidas y definidas de tal manera que puedan ser adaptadas a las diferentes situaciones o aplicarse de una manera específica a una situación determinada.

2. La naturaleza y el alcance de las medidas de política estructural han tenido, como en el caso de la política de mercados, repercusiones en el plano jurídico y en el financiero.

En lo que se refiere al plano jurídico, las decisiones adoptadas por la Comunidad lo han sido generalmente bajo la forma de «directivas».

Este instrumento jurídico comunitario define el objetivo de las medidas concebidas, su naturaleza técnica, las condiciones de realización, etc., dejando a las instancias nacionales la competencia en cuanto a la forma y a los medios a utilizar para alcanzar los resultados fijados.

Se debe señalar, sin embargo, que se han adoptado últimamente (junio 1981) una serie de nuevas medidas estructurales bajo forma de «reglamentos» y por tanto con carácter obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicables en todo Estado Miembro, como era el caso para la política de mercados.

Se pensó que era posible y deseable recurrir a este tipo de acto jurídico teniendo en cuenta el hecho de que se trataba de medidas más o menos definidas en sus detalles, aplicables a zonas presentando características relativamente homogéneas, y que era útil, sobre todo, acelerar el proceso de aplicación a la luz de la experiencia negativa adquirida en materia de plazos necesarios para la aplicación de directivas.

En el plano financiero las repercusiones son quizás más importantes. La Comunidad sólo se hace cargo a través del F.E.O.G.A., sección Orientación, de una parte del coste de las medidas o de las intervenciones (25 a 50 por 100) previstas por la reglamentación comunitaria.

Esta participación parcial se justifica por el hecho de que:

a) El poder discrecional que se deja a los Estados Miembros para decidir sobre la forma y elección de los medios puede alterar y reducir la noción de «carácter» comunitario o la definición de interés «estrictamente» comunitario de las medidas propuestas;

b) la corresponsabilidad financiera del Estado Miembro y la, aunque más limitada, del agricultor son consideradas como un elemento útil para asegurar la rentabilidad de la inversión global.

3. Antes de abordar los problemas planteados por la organización político-administrativa de los Estados Miembros conviene, con objeto de aclarar los diferentes aspectos de la cuestión, recordar brevemente los elementos esenciales de las

medidas estructurales puestas ya en marcha a nivel comunitario.

En este sentido se pueden distinguir esencialmente tres importantes grupos de medidas:

1º El conjunto de Directivas socio-estructurales de 1972 modificadas y completadas en 1981.

2º Las medidas en favor de las regiones mediterráneas y las que se refieren a la mejora de las estructuras de comercialización y de transformación (1978).

3º Una serie de medidas *ad hoc* relativas a unas zonas relativamente limitadas y con objeto de activar su desarrollo económico (1981).

3.1. El primer grupo constituye el núcleo de la actual política comunitaria e incluye cuatro Directivas válidas para toda la Comunidad, cuyos objetivos son:

— Financiar los planes de desarrollo con objeto de crear explotaciones más rentables (renta comparable), combinado con la canalización y disciplina de las ayudas nacionales a las inversiones.

— Acelerar el éxodo rural y el pase a la jubilación y así liberar tierras para aumentar la dimensión de las explotaciones.

— Mejorar la formación y la información profesionales.

— Garantizar un complemento de renta a los agricultores situados en regiones de montaña o con handicaps naturales.

3.2. El segundo grupo, reservado exclusivamente a las regiones mediterráneas, prevé una importante ayuda financiera para programas sobre riegos, infraestructura rural, repoblación forestal, reorientación del viñedo y para la mejora de las estructuras en la transformación y comercialización de los productos agrarios.

Esta última medida se recoge también en un reglamento válido para todas las regiones de la Comunidad.

3.3. El último grupo constituye un primer ensayo de me-

didias complementarias con respecto a las primeras grandes directivas estructurales.

Estas medidas están previstas en favor de las regiones menos avanzadas y que pasan por situaciones que hacen difícil, incluso nula, la aplicación de las directivas de carácter general.

En este caso, y con objeto de mejorar las condiciones de producción, se ha previsto poner en marcha en estas regiones medidas puntuales destinadas a una acción determinada (por ejemplo, drenaje en Irlanda, ligado al fomento del ganado vacuno) o a una actividad agrícola específica (programa zootécnico para regiones italianas de montaña) o también programas integrados que preconizan un desarrollo regional fundado en el estímulo de actividades, agrícolas o no, de la región en cuestión.

La multiplicidad de las medidas propuestas, la diversidad de los temas a que se refieren, las diferentes formas de los instrumentos jurídicos utilizados, la necesidad de un complemento nacional para la puesta en marcha y la financiación del conjunto de la póliza adoptada permiten entrever que la eficacia o ineficacia de la organización político-administrativa de los Estados Miembros puede tener, en la puesta en marcha de la P.A.C. de estructuras, un impacto mucho más significativo del que hemos visto para la política de precios y mercados.

V. LA GESTION DE LA POLITICA DE ESTRUCTURAS Y LA ORGANIZACION POLITICO-ADMINISTRATIVA DE LOS ESTADOS MIEMBROS

1. Para analizar con profundidad el tema en cuestión, es útil, teniendo en cuenta además la naturaleza y alcance de las medidas (objeto y forma jurídica), hacer una distinción de tres fases:

1º La elaboración y la adopción de las medidas a nivel comunitario (elaboración de la política).

2.º La trasposición a derecho nacional de las decisiones adoptadas por la Comunidad y que permiten al Estado Miembro definir la forma y el modo de realizar las medidas (nivel legislativo o reglamentario nacional).

3.º La aplicación del derecho nacional en la ejecución de las medidas (nivel administrativo o de gestión).

2. Por lo que se refiere a la primera fase, los Estados Miembros, a través de su ministro y representante competente del poder central, participan directamente en la toma de decisión a nivel de instituciones comunitarias.

Sin embargo, a diferencia de lo que se ha dicho para la política de mercados, el problema de consultar a las entidades periféricas, en el caso de los Estados Miembros con organización de tipo federal o regional, se plantea de manera más acuciante.

Y ello no solamente para poder disponer de elementos de juicio que se refieran a la situación local y así apreciar mejor la validez o fiabilidad de las medidas comunitarias propuestas, sino también por el hecho de que el Gobierno Central confía a estas mismas Entidades, importantes funciones de ejecución.

Este problema de política interior no se ha resuelto de una manera homogénea. Cada Estado Miembro interesado ha adoptado soluciones *ad hoc* para llevar a cabo estas consultas.

3. En lo que se refiere a la segunda fase, la situación es más variada y la organización político-administrativa del Estado Miembro puede tener un impacto positivo sobre la gestión —en el sentido más amplio de la expresión— de esta política de estructuras.

Ya en esta fase, «el tiempo» necesario para la transposición del derecho comunitario a derecho nacional es un factor importante en el éxito de la medida.

La rapidez depende de la complejidad de los trámites internos, y bajo este ángulo los Países Miembros que tienen una estructura centralizada se ven en cierto sentido favorecidos.

3.1. Es el caso de los Países Bajos, donde, por ejemplo, la transposición a derecho nacional se realiza por simple Decreto gubernamental, que confía a instituciones paraoficiales la aplicación de las directivas estructurales, sin ninguna descentralización del poder reglamentario.

En Francia, la transposición se realiza por decretos, órdenes y circulares, decididos según el caso por la Presidencia del Gobierno o conjuntamente por los Ministerios de Hacienda y Agricultura o solamente por el Ministerio de Agricultura.

En Dinamarca una Ley nacional establece un marco muy amplio para la puesta en marcha de las directivas.

Las disposiciones detalladas relativas a la aplicación son fijadas directa y exclusivamente por el Ministerio de Agricultura y remitidas inmediatamente al Organismo encargado de su aplicación.

En Bélgica se sigue un trámite análogo:

— Una Ley de base confía al Gobierno la aplicación de las medidas comunitarias, teniendo en cuenta ciertas orientaciones de carácter muy general.

— Un Real Decreto, preparado en particular por el Ministerio de Agricultura, fija las reglas detalladas para la aplicación.

— Si es necesario, Ordenes Ministeriales especifican las normas complementarias.

Procedimientos y trámites del mismo tipo se siguen en Irlanda y Luxemburgo.

3.2. En el Reino Unido, como en los casos precedentes, se somete a la aprobación del Parlamento un Decreto del Gobierno para transponer las disposiciones del plano comunitario al plano nacional. Sin embargo, aunque no se trata en realidad de ninguna descentralización del poder reglamentario, es necesario señalar que:

— Los «ministros» de Escocia e Irlanda del Norte participan de pleno derecho en la toma de decisión de la parte correspondiente al ministro de Agricultura. Las decisiones de

aplicación son establecidas conjuntamente por el ministro de Agricultura y los «ministros» regionales.

— En el caso de que la reglamentación comunitaria fuera facultativa, podría decidirse no aplicar la reglamentación a todo el conjunto del territorio nacional, sino limitarla a una sola región (por ejemplo, Escocia).

3.3. Los trámites resultan obligatoriamente más complejos en el caso de los Estados Miembros con estructura «regional» o «federal» más acentuada.

En lo que se refiere a la República Federal de Alemania, la transposición al plano nacional de las decisiones comunitarias se realiza de una manera relativamente compleja.

Sin embargo, los trámites actualmente en vigor y la división de competencias entre Bund y Länder en materia legislativa son ya el resultado de compromisos establecidos entre los poderes central y periféricos, compromisos impuestos por la necesidad de asegurar un sistema eficaz para la aplicación del derecho comunitario, incluida la financiación a nivel nacional, y que lleva consigo la responsabilidad prioritaria del Bund frente a la Comunidad.

Desde este punto de vista, la República Federal de Alemania puede ser considerada como un caso típico de una adaptación de la estructura del Estado Miembro derivada del alcance y de la naturaleza de las obligaciones contraídas a nivel comunitario por el poder central.

Como se ha indicado anteriormente, esta adaptación se ha hecho en el sentido de que el Bund ejerce las responsabilidades de forma más amplia que antes, dentro, claro, del marco definido en la Constitución Federal.

En efecto, hasta 1969 la política de mejora de estructuras agrícolas era competencia de los Länder, en la medida en que el Bund no ejercitaba por sí mismo esta competencia de interés nacional.

Evidentemente, esta situación, que había conllevado a que los Länder tuvieran un poder legislativo muy amplio, teniendo en cuenta la actitud del Bund, habría podido llevar, a medida que se extendían los poderes legislativos y reglamenta-

rios de la Comunidad en el terreno de la política de estructuras, a fricciones, incluso a incompatibilidades, entre el derecho comunitario y las acciones autónomas a nivel de las regiones.

La gestión de esta misma política de estructuras habría podido, consecuentemente, verse ampliamente afectada no sólo por la inseguridad jurídica, sino también por las dudas sobre la elegibilidad financiera de gastos con cargo al presupuesto comunitario y sobre la parte de financiación nacional.

La introducción del artículo 91.a) en la Constitución alemana, que regula entre otros casos la financiación de esta política, ha sido más tarde la base para crear unas condiciones tan claras como ha sido posible a la hora de la aplicación, a la vez en el plano nacional (competencias Comunidad/Bund), como regional (competencias Bund/Länder), de las directivas comunitarias referidas a las estructuras agrícolas.

Sobre esta base, las acciones para la mejora de las estructuras agrarias en general han sido consideradas como acciones comunes que dependen de la Comunidad alemana (Gemeinschaftsaufgabe) y se ha previsto un procedimiento preciso para definir las reglas obligatorias (directivas) para su aplicación.

A este efecto, un Comité de planificación (Planungsausschuss) elaboró un programa marco; este Comité es, en definitiva, responsable de la gestión de la política de estructuras, sobre todo para las acciones más importantes.

Es finalmente este mismo Comité quien establece las disposiciones reglamentarias para la entrada en vigor a nivel nacional y regional de las medidas estructurales, incluidas en la política de estructuras adoptada por la Comunidad.

La exigencia de hacer respetar en el plano interior las decisiones tomadas a nivel comunitario, cuya responsabilidad principal recae en el Bund, de una parte, y la necesidad de no dejar de lado completamente los derechos de los Länder, de otra, se ha resuelto por la composición especial del Comité de planificación, en cuanto al número de votos que corresponden al Bund y a los Länder y al sistema de votación.

En el seno de este Comité, el Bund dispone del mismo número de votos que el conjunto de los Länders y las decisiones se adoptan con mayoría de tres cuartos.

Por tanto, para llegar a una decisión preconizada por el Bund, es necesario que la propuesta pueda obtener también los votos de la mitad de los Länders.

La financiación de la acción común, por encima de la financiación prevista por la CEE, queda asegurada por un 60 por 100 a cargo del presupuesto nacional y por un 40 por 100 a cargo del presupuesto de los Länders.

En este contexto, la inclusión en la legislación nacional de las directivas y de las medidas comunitarias ha dado lugar a la situación siguiente:

i) Las disposiciones relativas a las medidas de modernización de las explotaciones (directiva 72/159/C.E.E.), así como una disposición fundamental para el cese anticipado de la actividad agraria (prima de cese, directiva (72/160/C.E.E.), han sido recogidas en el marco de la acción «común» alemana, y por tanto el Comité de planificación es competente para todas las disposiciones reglamentarias y de gestión;

ii) Una disposición fundamental (indemnización anual) de la directiva 72/160/C.E.E. es competencia exclusiva del Bund, y por esta razón debe ser regulada y financiada por una Ley nacional de contenido social;

iii) Las disposiciones para la formación y cualificación profesional (directiva 72/161/C.E.E.) con competencia exclusiva de los Länders, que están obligados a financiarlas por sus propios medios financieros.

Si el reparto de competencias en materia reglamentaria y de ejecución, esquematizadas anteriormente, puede ser considerado relativamente claro, no es menos cierto que los Länders pueden aún regular lo relativo a la disciplina y a la canalización de las ayudas nacionales para las inversiones, así como prever en ciertos casos y por sus propios medios, tasas de financiación por encima de las previstas en la legislación nacional.

Se puede decir, en conclusión, que todas estas imbrica-

ciones, así como algunas adaptaciones hechas a las directivas comunitarias para tener en cuenta la situación o la legislación de base nacional, han tenido y tienen repercusiones en la puesta en marcha y en la aplicación uniforme de la PAC.

A pesar de los esfuerzos desplegados, esta situación ha conducido en ciertos casos a poner en duda la elegibilidad financiera comunitaria para ciertas medidas consideradas en desacuerdo con el derecho comunitario y/o acordar derogaciones más o menos temporales, debiendo superar dificultades jurídicas y políticas cada vez más importantes a nivel de las instancias comunitarias.

3.4. En lo que se refiere a Italia, país miembro en el que la trasposición al derecho nacional de las medidas de política de estructuras ha planteado un considerable número de problemas de naturaleza institucional, política y administrativa, la situación, fundada en la Ley de 1975, puede esquematizarse así:

El Estado por medio de esta Ley de base, en realidad muy detallada (Ley del 9-5-75, número 153, que se refiere a la puesta en marcha de las directivas del Consejo de la C.E.E. para la reforma de la agricultura), ha hecho aplicable en todo el territorio nacional, la política de estructuras aprobada por la C.E.E., recogiendo lo esencial de las directrices comunitarias y ha reconocido a las regiones una extensa competencia legislativa y administrativa para la realización de estas directivas.

Sin embargo, al mismo tiempo la Ley precisa que este poder legislativo debe ser ejercido «de conformidad con las disposiciones contenidas en la Ley nacional, de todas las demás disposiciones que podrían ser decididas por el Estado en el ejercicio de sus funciones de coordinación y de orientación impuestas por el respecto de las exigencias de carácter unitario (del país), y teniendo en cuenta los objetivos, el programa económico nacional y los compromisos que se derivan de las obligaciones internacionales y en particular con la Comunidad Económica Europea».

Además, estas disposiciones específicas de la Ley marco establecen que:

— la ley marco en tanto que Ley del Estado es directamente aplicable en las regiones hasta el momento en que las regiones no tengan su propia reglamentación, respetando la Ley nacional;

— el Gobierno central tiene la facultad de subrogarse a la región en el caso en que hubiera «persistente incumplimiento» por parte de los organismos regionales en la realización de las funciones para la aplicación de las directivas comunitarias.

Reglas análogas están contenidas en la Ley número 382, del 22-7-75 (disposiciones para la financiación de las regiones y sobre la organización de la administración pública), y que regula las transferencias a las regiones de las competencias administrativas en la aplicación de los Reglamentos y Directivas de la C.E.E.

Este dispositivo es el resultado de un compromiso político, a nivel nacional, que habría debido resolver definitivamente el largo conflicto jurídico-político surgido en el momento en que Italia se encontró con la situación de definir, al mismo tiempo, su estructura regional y la aplicación de las decisiones comunitarias sobre política agrícola junto con la división de competencias entre el Estado y las Regiones.

Se ha señalado en un capítulo anterior, en qué sentido el Tribunal Constitucional italiano resolvió en 1972 la cuestión referente a la competencia exclusiva del Estado en la parte relativa a la política común de precios y mercados.

La misma sentencia, y en lo que a la política de estructuras se refiere, señalaba, sin embargo, que el Estado era el único responsable frente a la Comunidad en la ejecución de los compromisos comunitarios, aunque no se excluía la posibilidad de una distribución en favor de Entidades periféricas (regiones) de los poderes de aplicación de las reglas comunitarias si la Constitución había (lo que no era el caso) instrumentos adecuados permitiendo al Estado cumplir, en todo caso, sus compromisos internacionales, incluso en presencia de una inercia total por parte de la región considerada como competente para la aplicación de las medidas.

El Tribunal sugería finalmente que en estas condiciones

el único medio que se podía utilizar para permitir a las regiones participar en la aplicación de las normas comunitarias, era un acto de «delegación de poder» por parte del Estado en favor de las regiones. Esta «delegación de poder» permitía, en efecto, al Estado delegar sus poderes y subrogarse a la región beneficiaria de la delegación, en caso de no cumplimiento del mandato.

Por tanto, por esta decisión del Tribunal, el Estado quedaba, *de facto*, por delegación, árbitro de la transmisión, a las regiones, de sus poderes en materia de política de estructuras.

Inspirándose en esta situación y deseoso de mantener tanto como fuese posible los poderes centralizados, en 1973, el Gobierno decidió presentar al Parlamento un Proyecto de Ley para la aplicación de las medidas comunitarias que preveía una participación muy limitada de las regiones y reservada casi exclusivamente al terreno administrativo.

Fue en este momento cuando el conflicto entre partidarios del poder central y partidarios de la competencia regional se agravó, dando finalmente lugar, gracias a la integración del dispositivo de la delegación de poderes, a los compromisos reflejados en la Ley tal como fue aprobada en 1975 y que resumimos anteriormente.

Para mejor precisar lo ocurrido se hace necesario señalar que después del voto en el Parlamento hubo aún un recurso ante el Tribunal Constitucional por parte de las regiones y provincias con «régimen especial», solicitando la anulación de las disposiciones que acordaban al Estado la facultad de subrogarse a las regiones en falta, en la aplicación de las medidas comunitarias y nacionales.

El Tribunal, por decisión número 182, del 14-7-76, declaró no fundada la cuestión de legitimidad presentada por las regiones.

Desde entonces, la transposición a nivel nacional de las directivas C.E.E. se pueden considerar como terminada en lo que se refiere al Estado.

Esta trasposición tuvo lugar alrededor de cuatro años des-

pués de la toma de decisiones a nivel comunitario, con un retraso que ha afectado de forma sustancial la eficacia de las medidas elaboradas.

En el momento actual dos regiones no han ejercido sus derechos de legislar en la materia; dos lo han hecho únicamente aprobando una Ley regional que hace directamente aplicable la Ley nacional sin ninguna modificación; las otras lo han hecho completando las disposiciones nacionales, especialmente en lo que se refiere a la naturaleza y al nivel de las ayudas que se conceden a los productores.

A este respecto, ciertos problemas de compatibilidad entre disposiciones suplementarias regionales y disposiciones comunitarias, permanecen vivos entre regiones, Estado Miembro y Comunidad.

Además, una Directiva (la número 262-75-C.E.E.) no se aplica en todas las regiones interesadas, en la medida en que la autoridad regional no ha fijado aún el montante exacto de la indemnización que se debe pagar a los agricultores dentro de la horquilla prevista por la Ley nacional y la comunitaria.

En este caso también el problema de la descentralización y sus exigencias ha afectado, en definitiva, la gestión de la política de estructuras.

A pesar de los esfuerzos hechos para mejorar las condiciones de esta gestión, queda aún por eliminar, por ejemplo, una serie de inconvenientes para evitar iniciativas contrapuestas entre el poder central y las regiones, la inercia de alguna de ellas, la excesiva duración de los trámites administrativos o el reparto equitativo de los fondos disponibles.

4. En lo que se refiere a la tercera fase, es decir, a la ejecución administrativa de la política de estructuras agrarias, el comportamiento de los Estados Miembros es mucho más uniforme, y ello con independencia de su estructura política.

En general, la aplicación a nivel administrativo de la política de estructuras se halla muy descentralizada; las diferencias entre Estados Miembros se refieren, sobre todo, a la naturaleza (estatal, paraestatal, regional, profesional y mixta)

de las instancias periféricas encargadas de la ejecución administrativa.

Dentro de este contexto parece necesario señalar que en la República Federal de Alemania el Bund no tiene ninguna competencia administrativa en materia de directivas estructurales.

En Italia las competencias administrativas se han transferido a las regiones y son ejercidas por los Gobiernos regionales. Sin embargo, la estructura de la Administración encargada de las tareas de ejecución no es la misma en todas las regiones. Diferentes instancias, servicios regionales, entidades de desarrollo, administraciones locales, etc., pueden repartirse estas tareas de ejecución.

VI. CONSIDERACIONES FINALES SOBRE LA GESTION DE LA P.A.C.

1. A nivel comunitario consideramos que se ha realizado y puede continuar realizándose una gestión eficaz y satisfactoria de la política agrícola, siempre que la estructura político-administrativa del Estado haya permitido y continúe haciéndolo:

— Alcanzar a nivel nacional y regional los objetivos específicos de cada decisión adoptada por las instancias comunitarias.

— Hacer beneficiarse sin demora a los agricultores de todos los instrumentos de la P.A.C. para

- i) mantenimiento de precios;
- ii) integración de las rentas;
- iii) mejor de las condiciones socio-estructurales y técnicas de producción.

— Asegurar, en la utilización de estos instrumentos, condiciones uniformes, válidas para el conjunto del territorio nacional y compatibles con el derecho comunitario, que beneficien sin discriminación a todos los agricultores.

Ahora bien, a la luz de la experiencia vivida, se puede decir que esta eficacia en la gestión ha podido alcanzarse mu-

cho más fácilmente, incluso si han sido necesarios grandes esfuerzos, en la política común de precios y mercados que en la política de estructuras agrarias, y aún más fácilmente en el caso en que para la puesta en marcha de estas dos políticas el Estado Miembro ha seguido o preferido, si la alternativa era posible, la vía de la centralización de decisiones tanto a nivel legislativo reglamentario como a nivel administrativo.

Es un hecho que, para la aplicación de la política de estructuras agrarias, el sistema federal o regional del Estado, y en cualquier caso las condiciones en las que el poder periférico ha sido ejercitado y se ejerce, ha podido ser considerado un elemento negativo que ha retrasado o no ha permitido aún alcanzar en la gestión de esta política el grado de eficacia deseado y deseable.

2. Aunque es cierto que en estos casos particulares de Estados Miembros con estructura regional el legislador nacional ha creído oportuno, para la aplicación a nivel interior de las directivas comunitarias, transferir o dejar todo o solamente parte de los poderes a las regiones con el loable objetivo de permitir una mejor toma en consideración de las exigencias y de las particularidades de las situaciones locales, también es cierto que la descentralización y las condiciones del ejercicio del poder así descentralizado ha llevado consigo inconvenientes de diferente naturaleza que han afectado y pueden continuar afectando a la gestión de esta política comunitaria.

En el capítulo precedente se han analizado someramente algunos de estos inconvenientes, pero parece lógico, a modo de consideración final, recogerlos ahora aquí.

El tiempo necesario para la puesta en marcha en beneficio de los agricultores de las medidas comunitarias es más largo, los trámites son más complejos (notificación de las medidas de la región al Gobierno central y después a la autoridad comunitaria y viceversa, para la homologación de las medidas elaboradas), el riesgo de no conformidad con respecto a las reglas C.E.E., y por tanto de no elegibilidad financiera comunitaria de las medidas tomadas a nivel regional, son más grandes; además, la divergencia de interpretaciones puede

crear una inseguridad jurídica para el beneficiario de la medida.

Por otra parte, en un sistema regional se puede constatar una falta de uniformidad en el grado de intensidad de aplicación de las medidas de mejora de estructuras, si se compara la situación en las diferentes regiones.

Este diferente grado de intensidad depende en particular del espíritu de iniciativa del poder regional y del agricultor, así como de su formación profesional, de la organización administrativa de la región y del volumen de fondos que puede ponerse a disposición del Gobierno Central y de la Región para completar la financiación comunitaria.

Ahora bien, da la impresión que la gestión descentralizada ha penalizado más que ayudado a las regiones que tienen más necesidad de intervención y ayuda, en el campo de las estructuras agrarias.

Ello, evidentemente, no es el objetivo específico de una política comunitaria en la que una parte importante de los instrumentos se ha concebido para permitir a las regiones desfavorecidas reducir su retraso en este terreno.

Es cierto también que este estado de cosas no se debe totalmente a la estructura federal o regional del Estado. Otros factores muy importantes pueden desempeñar un papel negativo en la gestión de esta parte de la política comunitaria.

Desde esta óptica, y admitiendo que para la política de estructuras agrarias un cierto grado de descentralización se considera necesario, hace falta de todas maneras, para el éxito de estas operaciones, establecer a nivel regional toda una serie de estructuras y de instrumentos importantes a la vez sobre el plano legislativo y financiero y de la organización administrativa y técnica para crear un centro de gestión en condiciones de hacer frente a las obligaciones múltiples que se derivan de la responsabilidad de asegurar una gestión descentralizada tan eficaz como sea posible.

A menudo esta tarea es una obra difícil y a largo plazo, en particular si depende exclusivamente de fuerzas endógenas que podrían y deberían desarrollarse y manifestarse a nivel regional.

En todo caso, una estrecha colaboración de la Administración Central, para asegurar una coherencia entre la región y el Estado, y una aportación importante del exterior para la aplicación de los programas, constituyen algunos de los factores indispensables para que la Administración pueda asumir en este proceso de gestión de la política común de estructuras agrarias el papel positivo y dinámico para el cual esta descentralización ha sido y será reivindicada.

RESUMEN

En este artículo se hace un análisis del modo en que la estructura político-administrativa de los Estados miembros de la CEE ha podido influenciar la aplicación de las políticas comunes de precios, mercados y estructuras.

En primer lugar, se hace —bajo esta óptica— una presentación de la Política Agrícola Común para luego analizar separadamente la naturaleza y el alcance de las medidas sobre precios y mercados y sobre estructuras, así como la gestión de tales políticas en los diferentes Estados miembros.

Finalmente, en un capítulo de conclusiones, el autor resume la situación al señalar que la gran homogeneidad que presenta la estructura de gestión que todos los Estados miembros tenían o han establecido, ha conducido a una homogeneidad en la aplicación de la política de precios y mercados, independientemente de las respectivas organizaciones político-administrativas. Sin embargo, se ha detectado problemas y, sobre todo, retrasos en la aplicación de la política de estructuras; cosas que, sin ser atribuibles exclusivamente a la organización-político-administrativa de los Estados miembros, han afectado a la eficacia de la aplicación, por lo que se refiere tanto a rapidez como a homogeneidad.

RÉSUMÉ

Dans cet article on fait une analyse de la façon dont la structure politique-administrative des États Membres de la CEE a pu influencer l'application des politiques communes de prix et de marchés et de structures.

On fait d'abord une présentation, sous cette optique, de la Politique Agricole Commune pour analyser ensuite séparément la nature et la portée des mesures en matière de prix et de marchés et de structures, ainsi que la gestion de telles politiques dans les différents États Membres.

Finalement, dans un chapitre de conclusions, l'auteur résume la situation en signalant que la grande homogénéité que présente la structure de gestion que tous les États Membres avaient ou ont établi ou amené à une homogénéité dans l'application de la poli-

tique de prix et de marchés avec indépendance de son organisation politique-administrative. Cependant, on a détecté des problèmes et, surtout, des retards dans l'application de la politique de structures, les quels, sans être exclusivement attribuables à l'organisation politique-administrative des Etats Membres, ont affecté l'efficacité de l'application tant en ce qui concerne la rapidité comme l'homogénéité.

SUMMARY

In this article an analysis is made of how the politic-administrative structure of the member States of the EEC has been able to influence the application of the common policies of prices and markets and of structures.

First, a presentation is made, under this optique, of the Common Agricultural Policy in order to analyse, immediately after, separately, the nature and scope of the measures on prices and markets and on structures, as well as the administration of such policies in the different Member States.

Finally, in a chapter with conclusions, the author summarizes the situation by pointing up that the great homogeneity presented by the structure of management that all Member States had or have established have led to a homogeneity in the application of the price and market policy independently of its politic-administrative organisation. Nevertheless, some problems have been detected and, above all, some delays in the application of the politic-administrative organisation of the member States, have affected the efficacy of application as regards both speed and homogeneity.

